ACERCA DEL ABORTO TERAPÉUTICO

Hace ya unos años publicamos en una prestigiosa revista médica un trabajo que titulamos **Aborto terapéutico. ¿Es necesaria la autorización judicial?** Nos instó a escribirlo el requerimiento de un Juzgado Nacional de Instrucción que recibió de un hospital público de la ciudad una comunicación suscripta por cinco médicos de la institución en la que se refería que en la unidad de toginecología se encontraba internada una paciente de 29 años que padecía un carcinoma epidermoide primitivo de vagina, estadio III, embarazada de 18 semanas. Le habían realizado todos los exámenes e interconsultas pertinentes habiendo participado el “Comité de Ética” hospitalario cuyos miembros suscribían también el informe remitido al Tribunal.

Se solicitaba autorización judicial para interrumpir el embarazo por vía transabdominal con técnica de microcesárea para luego proceder al tratamiento radiante. Se destacaba en el informe, acompañado de una correcta historia clínica, que la indicación era compartida por la bibliografía médica referida al tema.

Los médicos que suscribían el informe expresaban que “no encontraban ninguna objeción, de ninguno tipo, a la interrupción del embarazo condicionando la misma a la aceptación, tras el consentimiento informado de la paciente.” Se

adjuntaba a los antecedentes el debido consentimiento, en el que por escrito la paciente aceptaba la interrupción del embarazo y posterior tratamiento con radiaciones.

El juez interviniente ante el pedido concreto, remitió el oficio al Cuerpo Médico Forense, para que en la fecha se expida al respecto, procediendo, ante el dictamen que ratificaba el diagnóstico y tratamiento de los médicos tratantes, a “autorizar” el mismo, dando así por concluida su intervención sin analizar la necesidad de la misma.

En nuestro trabajo, hicimos referencia a lo prescripto en el art. 86 del Código Penal, cuya segunda parte en su inc.1 se ocupa, sin denominarlo, del aborto terapéutico. “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios”.

Analizada la norma, surge que no se requiere ninguna intervención ni autorización judicial para practicar la interrupción del embarazo ante el supuesto que nos ocupa. No es necesario comunicar el caso, como tampoco informar la necesidad de practicar la interrupción de la gestación, ni que ésta se ha realizado.

Nuestra legislación no hace punible el aborto cuando con él se evi-

*Carlos F.L. Poggi
Victor L. Poggi*

ta un peligro (en su versión anterior el Código decía “grave peligro”) para la vida o salud de la madre, siguiendo como paso previo imprescindible el consentimiento informado de la paciente, etapa plena de connotaciones éticas vinculadas con el ejercicio del principio de autonomía de aquella, sustento prioritario de la relación médico/paciente. Si el paciente tiene capacidad para ejercerlo, es el único que puede decidir.

Aunque la norma legal sólo se refiere a la intervención de un médico, se aconseja realizar las interconsultas pertinentes para avalar el tratamiento propuesto. El Código de Ética de la Confederación Médica Argentina expresa en su art. 115 que la indicación “de la interrupción del embarazo deberá hacerlo una junta médica, uno de cuyos participantes por lo menos debe ser especializado en la afección padecida por la enferma”.

El caso fue sometido a consideración del Tribunal de Ética institucional que actuó en su categorización ética-praxiológica.

Todo lo actuado debe ser asentado -como lo fue- en la historia clínica, paradigma de la documentación médica y que suele ser la prueba instrumental más importante en aquellos casos donde es cuestionada la responsabilidad profesional del médico.

En el mes de junio ppdo los medios masivos de comunicación informaron “La Justicia autoriza un aborto terapéutico”. Una mujer de 35 años, embarazada entonces de once semanas se presentó ante un Tribunal de Familia bonaerense solicitando autorización para interrumpir la gestación, invocando que los médicos que la asistían en un hospital

de la zona se lo habían aconsejado porque la continuación del embarazo ponía en peligro su vida.

La paciente padecía hipertensión arterial y una cardiopatía severa, tratándose además de una mujer obesa, fumadora, con antecedentes de abortos espontáneos.

Los médicos tratantes coincidieron en la indicación de interrumpir el embarazo (“practicar el aborto terapéutico”) y aunque no era necesario -como en el caso que generó nuestra primera presentación- se pidió a la paciente una autorización judicial. Ella así lo hizo cumpliéndose el primer eslabón de la totalmente prescindible cadena procesal.

El Tribunal de Familia sentenció en favor de la petición de la paciente pero sucesivos planteos legales hicieron que el caso llegara a la Suprema Corte Provincial.

Los servicios asistenciales que atendían a la paciente, el de obstetricia y ginecología, mencionaban el “alto riesgo que presentaba la madre, si continuaba la gestación”, opinión ratificada por la Comisión de Bioética hospitalaria.

El alto tribunal hubo de actuar rápidamente, convocando a un acuerdo extraordinario. Las instancias procesales continuaron, como lo hacia la evolución de la gestación con sus posibles consecuencias y tras prolongado debate; por mayoría, los jueces rechazaron el recurso planteado por el representante legal de la persona por nacer autorizando el aborto terapéutico. La votación resultó favorable por seis contra tres, expresando el presidente del tribunal -que votó por la negativa- que “todos, los ministros, coincidimos en que el caso no debía llegar a la Justicia, pero llegó y

hubo que optar”. En su voto el distinguido magistrado destacó que “no hay norma en el Derecho Argentino que autorice a un juez a disponer de la muerte de una persona, ni aún para salvar a otra”.

En una entrevista periodística, expresó un concepto que no queremos dejar de transcribir y que, con todo respeto, compartimos. Dijo el Juez: “Tengo miedo que el fallo sea usado para discutir cuestiones que superan las tratadas en él, es decir discutir sobre el aborto terapéutico, desde ópticas que no tienen que ver con el ámbito judicial”

A través de dos casos que llegaron a sede judicial se analiza el aborto terapéutico, considerando cual debe ser la actuación médica ante tales situaciones.

Se tratan normas legales, deontológicas y éticas destacando que en tales circunstancias no se requiere intervención Judicial.

La “judicialización” innecesaria, victimiza a la mujer y tiene indiscutible idoneidad para dañarla física y psicológicamente si se procede con retardo en relación con la indicación médica.